



José Manuel Vivanco: A López Obrador no le importan los reporteros asesinados

(Gabriela Sotomayor/ pág.24-25)

A Andrés Manuel López Obrador “no le importa el tema de los periodistas ejecutados; en los últimos 20 años han sido asesinados por lo menos 145 periodistas en México y de esos, 25 en los primeros tres años de su gobierno. Que México sea uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo parece no importarle”, dice a Proceso el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), el chileno José Miguel Vivanco, en una de las últimas entrevistas concedidas a un medio mexicano antes de dejar su cargo, a fines de este mes, en la organización en la que ha estado en pie de lucha 30 años.

“La visión que tiene del periodismo es que los buenos periodistas son los que apoyan al gobierno y lo aplauden y le rinden homenaje, en contraste con los malos periodistas que son los que lo critican”, añade.

A su modo de ver, han sido “muy reveladores” ciertos debates públicos, como el que sostuvo en julio de 2019 en una “mañanera” con el reportero de Proceso Arturo Rodríguez, quien lo cuestionó sobre la operación de compra-venta de Fertinal el sexenio pasado.

En opinión de Vivanco, en ese debate López Obrador manifestó “en términos transparentes y muy genuinos que como ya está en el poder, el semanario debería apoyar su movimiento, sumarse al gobierno y rechazar la campaña neoliberal, pidiendo que no haga eco de la propaganda antigobierno”.

—¿Qué es lo que más le preocupa del gobierno de López Obrador, que se dice de izquierda? —pregunta la corresponsal.

—Es un impostor. Ha demostrado ser un caudillo latinoamericano clásico que busca fórmulas para fortalecer su poder personal y dismantelar las instancias que se han construido con gran esfuerzo en un país como México, gobernado por un partido único durante 70 años, pero que ha podido construir una institucionalidad joven que persigue asegurar rendición de cuentas y fiscalización de las autoridades máximas.

“Todo eso a AMLO le molesta. Siente que son ataduras que limitan el ejercicio del poder por parte del caudillo que es él. Y digo que es un típico caudillo porque todos los días defiende en las mañaneras la tesis de que por el solo hecho de haber sido elegido presidente de México de manera incuestionable y por el solo hecho de seguir siendo tan popular, tiene la licencia para ejercer el poder como se le antoje.



“Y cualquiera que se cruza en su camino, ya sea instituciones de control como el INAI, el INE o el propio Poder Judicial, pasan a ser corruptos morales (es el lenguaje que usa). Su tesis es que por arte de magia la sola elección de él como presidente de México acaba con cualquier peligro de corrupción”, insiste.

“Si fuera por él, todos los mexicanos bien intencionados deberían estar trabajando para el gobierno, querría imponer una especie de unanimidad y si alguien no se siente representado por su gobierno es porque se trata de alguien que puede perfectamente ser calificado como un corrupto moral.

“Lo que más me perturba de AMLO son sus esfuerzos por dismantelar el estado de derecho en México, un excelente ejemplo fue la ‘Ley Zaldívar’, que pretendía extender el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia y –¡ojo!– de los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, en contradicción con lo establecido en la Constitución.

“Más de una vez AMLO ha dicho que los jueces que fallan contra el gobierno son corruptos y ha solicitado que se investigue a un juez federal que objetó su proyecto de reforma energética. Lo normal en un sistema de estado de derecho es que si el gobierno está en desacuerdo, interpone un recurso de apelación, para eso están los recursos judiciales; si uno cree que la decisión de un juez no le favorece, interpone un recurso ante el tribunal supremo y puede llegar hasta la Suprema Corte, pero no se va contra el juez para que lo sancionen disciplinariamente porque falló contra el interés del gobierno”, argumenta.

Militarización

Se refiere también al “decretazo” en el que AMLO declaró sus proyectos de la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía como de seguridad nacional, don-de está el Ejército de por medio, e independientemente de lo que se estime en la Corte “esto es un escándalo, porque no quiere rendir cuentas”.

Por otra parte, señala que la militarización en el país “es insólita, no tiene precedente en la historia de México, ni siquiera en tiempos del PRI, porque el acuerdo en tiempos del PRI es que los civiles no se metían con los militares y los militares no se metían en política”.



Condena que hoy “los militares están encargados de construir aeropuertos, trenes, carreteras, hospitales, canales de riego; están encargados de puestos de control migratorio, aduanas; están a cargo de la repartición de fertilizantes, de medicamentos, incluso de transferencias de dinero en programas sociales; están involucrados en la siembra de árboles, en la distribución de vacunas, en administrar la aviación civil, todo este tema de las Islas Marías y las 19 delegaciones estatales del Instituto Nacional de Migración y por último tienes al secretario de Defensa que abiertamente ha incursionado en política, anunciando públicamente su apoyo al proyecto político de AMLO, diciendo que las fuerzas armadas se identificaban con su proyecto y esto significaba la unidad nacional.

”Respecto a las desapariciones, de acuerdo con cifras oficiales desde 1964 hay al menos 90 mil desaparecidos, cerca de 20 mil en el gobierno de López Obrador, dice. “Sin embargo, solamente tiene atención para Ayotzinapa, lo cual es importante pero no suficiente”, argumenta Vivanco, quien celebra la labor de Karla Quintana, comisionada nacional de Búsqueda de Personas de México, “que es digna de aplauso, porque ha hecho un esfuerzo genuino y enorme por determinar el número de desaparecidos en México y publicarlo a través del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

En lo que se refiere a los migrantes, observa que “AMLO también en el pasado hizo campaña y se mostró muy solidario con la cuestión migratoria; sin embargo no es exageración y es justo decir que ha hecho mucho más que cualquier presidente mexicano anterior para evitar que los migrantes lleguen a la frontera sur de Estados Unidos, desplegando a 28 mil soldados en todo el país para detener el flujo migratorio”. Y menciona incidentes de militares que han disparado a matar contra migrantes, como el ocurrido en marzo de 2021, en que el guatemalteco no frenó en el retén de control, y el de octubre, “en el que dispararon contra el camión en el que viajaban cubanos y mataron a dos de ellos, sembrando después una arma para justificar el ataque”.

Reiteró lo expresado en el informe de HRW de 2021 sobre el manejo de la pandemia de López Obrador, comparándolo con autócratas como Donald Trump y Jair Bolsonaro, que también minimizaron la gravedad y los riesgos a la salud pública y se ha rehusado a usar la mascarilla, salvo en su viaje a Washington y en los aviones. Es una lástima “cuando uno ve al máximo líder del país que minimiza el asunto, que se reúne con la gente, que se abraza con la gente e ignora las medidas elementales de salud pública recomendadas por la ciencia para reducir las posibilidades de contagio, específicamente el uso de la mascarilla.



“AMLO y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, tienen una gran responsabilidad por la negligencia con la que han actuado y por sus políticas, llevando al país a estar entre los que tienen el más alto índice de muertes por covid en el mundo”, agrega. Respecto al tema de la política exterior de López Obrador, que invoca el principio de no intervención o no injerencia, totalmente desacreditado, y que va contra las normas jurídicas universales de México, dice que López Obrador: “Se lava las manos y se abstiene de sumarse a condenas, como en el caso de Daniel Ortega en Nicaragua, donde se han producido hechos sin precedente en la región, donde el dictador decidió secuestrar arbitrariamente a los siete candidatos presidenciales que podrían derrocarlo en las elecciones presidenciales y asegurar su reelección”.

–En este contexto de militarización del país, asalto al estado de derecho, con-trol del poder judicial, ¿piensa usted que AMLO está preparando el terreno para eternizarse en el poder?–

Siempre he tenido por costumbre no especular, no hacer predicciones; en-tramos en un terreno que claramente es opinable, pero mientras trabaje para HRW, como no soy un opinólogo ni de la comentocracia, prefiero circunscribirme estrictamente a los hechos y los hechos demuestran lo que he sostenido: que AMLO está abierta y deliberadamente buscando el desmantelamiento del estado de derecho y de la democracia.

“Pero de ahí a que quiera perpetuarse en el poder y hacer como hicieron otros autócratas similares en América Latina, que es finalmente cambiar la Constitución para permitir su reelección indefinida, prefiero no comentar”, remata.

ooooo

“La Cuarta Transformación” escribe su propia historia

(Melissa Amezcua/ pág. 30-32)

Dos historiadores consideran que la estructura y los contenidos del libro Historia del pueblo mexicano, con presentación del presidente López Obrador, no logran plenamente el objetivo expreso del gobierno de darle la adecuada importancia a las luchas de la población que se habían omitido o menospreciado en las versiones oficiales –como las de mujeres y afrodescendientes–, además de establecer las raíces de la llamada Cuarta Transformación. Al respecto, la diputada perredista Olga Luz Espinoza indica que junto a colegas priistas prepara un amparo contra éste y otros libros de texto, con los que el gobierno, como “cualquier dictadura”, busca el “adoctrinamiento” de los estudiantes.



En palabras del presidente López Obrador, el libro Historia del pueblo mexicano busca contar las luchas y sufrimientos de aquellos omitidos en las narraciones oficiales y, de paso, asentar las bases históricas que darían pie a lo que él ha denominado la Cuarta Transformación.

Sin embargo, dos reconocidos historiadores consideran que en las 300 páginas del libro se desperdició esa oportunidad, pues se omite hablar a profundidad de lo ocurrido en las últimas décadas: el autoritarismo de un partido político, la Guerra Sucia, el rol del Ejército, la crisis de los desaparecidos, el narcotráfico y la corrupción.

Los 100 mil ejemplares de Historia del pueblo mexicano, editado por el gobierno federal, se repartirán en 266 escuelas normales del país. En el proyecto se incluyeron los textos de 23 autores, como Jesús Hernández Jaimes, Lorenzo Meyer, Carlos Illades, Enrique Semo, Armando Bartra, Ana Lau Jaiven y Olivia Gall, entre otros.

Está dividido en cinco capítulos: “La Conquista, resistencia indígena y Virreinato”, “La Independencia”, “La Reforma”, “La Revolución y “La lucha por la soberanía económica, los derechos sociales, la justicia y la democracia”. La portada fue ilustrada por Rafael Barajas Durán, El Fisgón, quien también escribió un pasaje sobre “la segunda independencia de México” y es director del Instituto Nacional de Formación Política del partido Morena.

Consultados por Proceso, César Enrique Valdez Chávez, profesor investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y Marco Antonio Flores Zavala, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), destacan que el gran logro de este libro, coordinado por Memoria Histórica y Cultural de México, es que finalmente se haya considerado a las mujeres a lo largo de la historia del país.

Celebran también que los afrodescendientes estén ampliamente mencionados como parte de la sociedad mexicana. En el texto “Motines, sublevaciones y otras formas de resistir”, María Elisa Velázquez Gutiérrez recuerda la revuelta de “negros y mulatos” en la Ciudad de México, ocurrida en 1612 a causa de la muerte de una mujer negra.

En este apartado, incluido en el primer capítulo, “Conquista, resistencia indígena y Virreinato”, la autora también hace un recuento de los oficios asignados a los afrodescendientes.

Y el historiador Jesús Hernández Jaimes reconoce además la afroascendencia de Vicente Guerrero, del pintor Juan Correa y de José María Morelos, cuyo ejército estuvo formado en su mayoría por mulatos.



La breve presentación de López Obrador da pie a la introducción de Eduardo Villegas y Felipe Ávila, quien también es autor del capítulo sobre la revolución democrática y popular.

Aunque entre los autores hay investigadores consolidados y nuevos escritores, coincidieron Valdez Chávez y Flores Zavala, sorprende la inclusión de Rafael Barajas, El Fisgón. Flores Zavala incluso lo considera una “mancha académica”, porque a su juicio El Fisgón carece de trayectoria como historiador y mantiene una postura política favorable a la actual administración.

Por su parte Valdez Chávez considera que este pasaje recorre a “galope tremendo” el siglo XIX, pues se come décadas en dos o tres párrafos. “Probablemente a la hora de estar viendo la obra en general se dieron cuenta que faltaba algo que explicara este siglo”, comenta.

Al narrar la historia de las mujeres, el libro llega a los movimientos feministas de 2018 en México. Se reconoce el rol de las mujeres indígenas que participaron en el periodo de la Conquista, hasta las mujeres de la actualidad que luchan por la despenalización nacional del aborto.

Se reconoce también a la mujer en la Independencia y la Revolución; obreras, campesinas, estudiantes, aquellas que lucharon por el derecho al voto y al divorcio, y quienes a partir de la segunda mitad del siglo XX tomaron las calles para el avance en los derechos sexuales, reproductivos, laborales y civiles de las mujeres.

Los últimos sucesos del feminismo mexicano destacados por la autora Ana Lau, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, son el #MeeToo, ocurrido luego de que las mujeres usaran las redes sociales para denunciar a agresores y violentadores, los dos encuentros de mujeres organizados por las zapatistas en Chiapas en 2018 y 2019, y la candidatura de Marichuy a la presidencia de México en las elecciones de 2018.

Omisiones y “adocrinamiento”

Para los historiadores Valdez Chávez y Flores Zavala es un desperdicio que no se incluyera la historia social, económica y política reciente del país, pues se diluye el contexto y las razones que darían pie a la llamada Cuarta Transformación, pese a que López Obrador lo ha reiterado en múltiples ocasiones.

Por ejemplo, en una sola página del texto “Irrumpen los pueblos originarios”, de Armando Bartra, se menciona el levantamiento del EZLN en 1994, las negociaciones de San Andrés Larráinzar, las protestas del zapatismo en la Ciudad de México, la frase de Vicente Fox de resolver “lo de Chiapas en 15 minutos” y la negociación suspendida “pero no cancelada” a casi 30 años del surgimiento de la organización.



En el apartado “La opresión, la discriminación y la revuelta” se reconoce la importancia de lo que plasmaron las mujeres zapatistas en la Ley Revolucionaria de las Mujeres. Pero con esto se cierra el capítulo.

“Se tenía que haber hecho hincapié en esas problemáticas políticas, económicas y sociales del neoliberalismo, decretado como el enemigo público número uno de esta administración, y todo lo que modificó y no se alcanza a ver en el libro”, considera Valdez Chávez.

Otro breve texto, “Neoliberalismo y memorial de agravios”, de Francisco Pérez Arce Ibarra, establece que el neoliberalismo se terminó en 2018 con la llegada de López Obrador a la Presidencia. En él se mencionan crisis económicas como la de 1982, el debilitamiento de los sindicalismos, el despido de los 44 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro en el sexenio de Felipe Calderón y la lucha magisterial de la CNTE.

El texto avanza rápidamente y afirma que a partir de 2018 se acabó con la subcontratación (outsourcing), se estableció un aumento sin precedente del salario mínimo y se avanzó en la libertad sindical, sin ahondar en otro tema.

“Está muy bien planteado el siglo de la Conquista, y principios del siglo XX, pero después se desdibujan los puntos más duros del autoritarismo mexicano del siglo XX, por el cual es necesaria una ‘cuarta transformación’. Ahí sí queda a deber bastante el libro”, expresa el especialista del INAH.

Para Flores Zavala no se trata de una omisión voluntaria o de censura, sino de que quizás aún no hay expertos en estos temas y dice que considerar al presidente como un personaje histórico en un libro promovido desde el Ejecutivo habría sido “un escándalo”.

Reitera que se omitieron pasajes de gran importancia en la historia reciente de México, como la Guerra Sucia, de la cual no hay una sola mención; los nexos del PRI con los aparatos de seguridad de Estados Unidos; el entusiasmo hacia la Revolución Cubana y los movimientos sociales de Centroamérica.

Tampoco se mencionan la llamada “guerra contra el narcotráfico”, la crisis migratoria ni los desaparecidos. “No toca nombres de lo inmediato. Es como lo que ocurrió en los libros de texto de Zedillo y Elba Esther, que intentaron cuidarse. Hay una ausencia notoria al tratamiento al Ejército y de la profesionalización de la administración pública”, observa el profesor investigador de la UAZ.

Además, Flores Zavala critica que el libro fuera escrito sólo por profesores de la Ciudad de México y carezca de una mirada fuera del centralismo, la cual serviría para que profesores y alumnos de las normales tuvieran un contexto de las luchas de sus regiones.



Desde su punto de vista, faltó una mirada al periodo colonial para entender cómo se resquebrajó el imperio de Iturbide, cuando se fortalecieron las regiones y se debilitó la ciudad de la Corte. Aunque dijo estar de acuerdo en el tratamiento en contra de las élites y en general la mirada a la historia del pueblo de México.

Para Valdez Chávez las omisiones e insuficiencias se deben a la falta de estructura editorial. A su parecer el texto de Enrique Semo titulado “Las tres grandes transformaciones de México” es el que le da consistencia al libro y debió colocarse al principio, no en el penúltimo capítulo.

También, a su juicio, “se notan no inconsistencias pero sí diferencias en la manera en la que se comunican los contenidos. Hay unos textos que pudieron ser más amplios que de repente desmerecen lo temas”. Como ejemplo menciona la parte en la que se habla del movimiento obrero mexicano, un pasaje “disperso”, lo mismo que el relativo a la lucha campesina del siglo XX.

Asimismo considera que si en el libro hubieran quedado más claras las rebeliones indígenas del siglo XIX, se entendería el matiz de por qué ha habido sectores que no se han pacificado. Un punto a favor del libro como material didáctico, dice Valdez Chávez, es que varios textos sí se desmarcan de los grandes personajes de siempre y eso sirve para que los profesores se salgan de la “historia de bronce”: “La historia oficial es la que cambia según el gobierno, y la de bronce está enclavada en que hay grandes héroes y personajes”.

Consultadas por este semanario, las legisladoras de la Comisión de Educación del Congreso dijeron no haber leído el libro en cuestión, para el que según datos oficiales se destinaron 3 millones de pesos.

La diputada morenista por Veracruz Flora Tania Cruz Santos, presidenta de la comisión, dijo que aún no tenía acceso al material, pese a que está disponible en formato digital en la página del gobierno de México. Mientras que la secretaria de la comisión, la perredista Olga Luz Espinoza, dijo estar preparando junto a diputadas del PRI un amparo para suspender la distribución de algunos libros de texto, aunque se enfocó en el titulado México, grandeza y diversidad, y afirmó que Historia del pueblo mexicano iría en paquete en dicho recurso legal.

“Renovaron todos los libros de texto y están aprovechando para meter los contenidos dentro de la visión, que es lo que preocupa. Están buscando el adoctrinamiento para los niños, niñas y adolescentes con la finalidad de cualquier dictadura, que es la conservación y preservación del poder”, señala la diputada del PRD.

ooooo



Con tufo a corrupción, la millonaria fortuna de Gil Zuarth

(Mathieu Tourliere, pág. 6-10)

Considerado en su momento como arquetipo del “nuevo PAN”, Roberto Gil Zuarth aprovechó su paso por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa como trampolín hacia una vida de millonario, que construyó entre cargos públicos y negocios al amparo de los gobiernos de sus aliados políticos y que ahora son investigados por el gobierno federal.

Sólo entre 2012 y 2021 el político reportó ingresos por 76 millones 436 mil pesos, incluyendo 14 millones de pesos producto de sus seis años como senador, a los que se suma una serie de “préstamos” inexplicables por 63 millones 352 mil pesos, presuntamente desviados de la campaña de Josefina Vázquez Mota en 2012.

Investigaciones que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha realizado sobre Gil Zuarth, y cuyos detalles obran en poder de Proceso, exhiben pagos por consumo en tarjetas de crédito por 161.9 millones de pesos, modificaciones millonarias a su declaración fiscal, gastos de 22 millones 717 mil pesos en “viáticos” entre 2012 y 2020 –principalmente durante su tiempo como senador– y operaciones de 15 millones de pesos de su esposa con empresas fantasma, en vísperas de adquirir una mansión de 26 millones de pesos. El expediente pasó ya a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR).

Entre la telaraña de personajes con movimientos millonarios sospechosos que la UIF descubrió en torno a Gil Zuarth figuran su mentor político, el ahora senador Germán Martínez Cazares y sus socios –del grupo de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el arranque del sexenio de Calderón–; su familia política vinculada al exgobernador priista Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz–; sus socios y aliados en el PAN, incluyendo al gobernador tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y también destacan sus vínculos con sus despachos y los de sus socios con la contratista Tradeco.

Algunos de los hallazgos de la UIF sobre Gil Zuarth se ventilaron en la prensa desde agosto de 2020, entre otros, por el columnista Salvador García Soto en El Universal, la periodista Jannet López Ponce, en Milenio, o por los diarios Reforma y La Jornada. Sin embargo, el informe en poder de Proceso contiene detalles inéditos sobre la red financiera del panista.



De acuerdo con la información obtenida por este semanario, la UIF empezó a investigar a Gil Zuarth en agosto de 2017 durante la gestión de Alberto Bazbaz Sacal, a finales del sexenio de Enrique Peña Nieto. Pero con la llegada de Santiago Nieto al frente de la UIF la dependencia profundizó sus investigaciones, ahora con aspectos privados: Nieto es esposo de Carla Humphrey Jordán, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), quien estuvo casada con Gil Zuarth hasta que demandó el divorcio en agosto de 2013.

En julio de 2020 Humphrey señaló en entrevista con la periodista Carmen Aristegui que su exesposo ejerció “violencia política” en su contra, pues sostuvo que, desde su “posición de poder que le permitía pedir favores”, el político “activamente (...) bloqueó, movió, habló, para impedir” que llegara al INE.

ooooo

Segob, obligada a sancionar a jerarcas católicos por activismo anti-4T

(Rodrigo Vera, pág. 27-29)

El pasado miércoles 19, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió un fallo histórico con el que asestó un duro golpe a la jerarquía católica mexicana: determinó que dos influyentes cardenales –Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, y Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo emérito de Guadalajara– violaron el principio constitucional de separación Iglesia-Estado, al hacer proselitismo político contra Morena durante las elecciones del año pasado.

Esta condena del máximo tribunal electoral, que también pone en la picota a los sacerdotes Mario Ángel Flores y Ángel Espinosa de los Monteros, de inmediato levantó una fuerte protesta por parte de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), que salió a defender a sus cuatro ministros porque, dice, se está coartando su “libertad de expresión”.

Al margen de esta protesta eclesiástica, será el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien por ley deberá sancionar a los jerarcas infractores, con penas que pueden ir desde un apercibimiento –ya de por sí oprobioso–, la clausura de sus templos o incluso quitarles el registro a las asociaciones religiosas a las que pertenecen, en este caso las arquidiócesis de México y Guadalajara.

Elio Masferrer Kan, especialista en asuntos religioso-electorales, comenta sorprendido: “Estamos ante un hecho inédito; es la primera vez que en México un tribunal civil castiga a dos jerarcas con rango de cardenal, el más alto grado en la jerarquía católica. Los acusa de hacer proselitismo electoral contra Morena, el partido en el poder, terminando así con la época en que los altos jerarcas eran intocables. Pone fin al fuero eclesiástico”.



–¿No encuentra ningún antecedente similar en la historia reciente?

–¡No! ninguno, desde el gobierno del general Plutarco Elías Calles, cuando se dio la Guerra Cristera, ninguna institución del Estado mexicano había asestado un golpe tan fuerte a miembros del alto clero, entre ellos al mismísimo arzobispo primado de México, Aguiar Retes, quien ostenta el cargo más alto entre sus pares obispos por estar al frente de la Iglesia en la capital del país.

“Mientras que el cardenal Sandoval Íñiguez, aunque ya no sea titular de la arquidiócesis de Guadalajara, sigue teniendo un liderazgo moral muy fuerte entre los católicos conservadores del Bajío, descendientes de los cristeros. Conserva su influencia en un sector importante de la Iglesia”.

–¿Y qué me puede decir de los dos sacerdotes sancionados?

–Bueno, Mario Ángel Flores es un intelectual de Iglesia; fue rector de la Universidad Pontificia y dirigió el ya desaparecido periódico Nuevo criterio, de la arquidiócesis de México. Mientras que Espinosa de los Monteros es un destacado influencer de los Legionarios de Cristo, la estructura religiosa-empresarial más poderosa en el país. No estamos hablando de simples párrocos de pueblo.